

RESOLUCIÓN No. 00959

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades delegadas por la Resolución No. 1037 del 28 de julio de 2016 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009, en cumplimiento de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, la Ley 1333 de 21 de julio 2009, Decreto 948 de 5 de junio de 1995, Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974, Resolución 627 de 7 de abril de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ley 1437 de 18 de enero de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, mediante Auto No. 03154 de 27 de noviembre de 2013, inició procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, identificado con matrícula mercantil No. 00712003 del 21 de junio de 1996, ubicado en la carrera 80 I No. 42- 42 sur de la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que el Auto No. 03154 de 27 de noviembre de 2013 fue notificado personalmente al señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, el día 12 de diciembre de 2013, comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios mediante radicado 2013EE169398 del 11 de diciembre de 2013 y publicado en el Boletín Legal Ambiental de esta Secretaría el día 12 de marzo de 2015.

Que a través del Auto No. 01689 del 26 de marzo de 2014, se formuló en contra del señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, presuntamente a título de dolo, los siguientes cargos:

Página 1 de 25

RESOLUCIÓN No. 00959

“(…)

Cargo Primero: Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una Zona Residencial en un horario diurno, mediante el empleo de un compresor, equipo de soldadura eléctrico, equipo de soldadura autógena y lijadora contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del Artículo Noveno de la Resolución 0627 de 2006.

Cargo Segundo: Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995.

(…)”

El citado acto administrativo, fue notificado personalmente el día 9 de julio de 2014, al señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, quedando debidamente ejecutoriado el 10 de julio del mismo año.

Que dentro del término legal establecido, no fue presentado por parte de la propietario del establecimiento comercial **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, escrito de descargos ni solicitudes probatorias.

Que mediante el Auto No. 00133 de 17 de enero de 2015, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, abrió a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta entidad mediante el Auto No. 03154 de 27 de noviembre de 2013, inició procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, identificado con matrícula mercantil No. 00712003 del 21 de junio de 1996, ubicado en la carrera 80 I No. 42- 42 sur de la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C.

Dentro del precitado auto se decretaron como pruebas dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, todos los documentos que obran dentro del expediente SDA-08-2013-1938, que sean pertinentes, necesarios y conducentes al esclarecimiento de los hechos constitutivos de supuestas infracciones ambientales.

El Auto No. 00133 de 17 de enero de 2015, fue notificado personalmente al propietario y/o responsable del establecimiento de comercio, señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, el día 22 de mayo del año 2015, quedando debidamente ejecutoriado el 25 de mayo del 2015.

RESOLUCIÓN No. 00959

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro Estado social de derecho.

De la misma forma, existen en nuestro ordenamiento unas normas reguladoras ambientales que conducen a la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias, por el incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.

Que de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Nacional contiene derechos y deberes de los ciudadanos frente a la sostenibilidad de un ambiente sano, en el artículo 79 encontramos que “*Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano*” y en el artículo 80 ordena al Estado que “*...deberá prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados*”. Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos, y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que esto no sea vulnerado.

Que a su vez, el artículo 80 de la Constitución Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, en el inciso 2° del mencionado artículo, se refiere a los instrumentos represivos y establece la obligación por parte del estado para “*imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*”.

Que igualmente, el ordenamiento constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Consecuentes con la política pública de protección del ambiente y el contenido y alcance de las regulaciones existentes en materia de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en nuestro país, es imprescindible actuar dentro del marco de las finalidades de la función administrativa de la autoridad ambiental, a efectos de propender por el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, para velar porque se asegure el establecimiento y la operación de controles adecuados y eficaces respecto a los factores

RESOLUCIÓN No. 00959

de deterioro ambiental, teniendo de presente que el desarrollo económico no se convierta en una amenaza a la preservación de los recursos naturales renovables.

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que el párrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “*en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales*”.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que el artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 otorgó la oportunidad al presunto infractor para que dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, presentara descargos por escrito y aportara o solicitara la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

Que el presunto infractor, señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, no presentó escrito de descargo ni solicitudes probatorias frente al Auto de formulación de pliego de cargos No. 01689 de 26 de marzo de 2014, dentro del término legal.

Que descendiendo al caso *sub examine*, es importante señalar que esta autoridad ambiental ejerce las funciones de control y vigilancia de los recursos naturales en el Distrito Capital, por lo que esta investida con las facultades necesarias para hacer respetar la normativa ambiental dentro de su jurisdicción. Así pues, puede realizar visitas técnicas y adelantar procedimientos sancionatorios administrativos de carácter ambiental en caso de encontrar vulneraciones a las normas positivas ambientales.

En tratándose de las infracciones ambientales en materia de contaminación auditiva, es decir, ruido, se tratan de conductas de ejecución instantánea, por lo que una vez se confirma

Página 4 de 25

RESOLUCIÓN No. 00959

con la medición que se sobrepasaron los límites máximos permisibles de emisión de ruido para el sector y el horario, la vulneración al recurso se consumó.

Por lo tanto, las mediciones efectuadas el día de la visita técnica de inspección (19 de junio de 2013) que sirvieron de sustento para proferir el Concepto Técnico No. 06026 del 27 de agosto de 2013, generan una condición única para determinar si existe o no infracción ambiental.

Es importante resaltar, que las condiciones encontradas en el momento de la visita técnica, prueban un incumplimiento a la normativa ambiental en materia de ruido, independientemente de las acciones que con ocasión del funcionamiento del establecimiento de comercio, se lleven a cabo para la mitigación del impacto sonoro dentro del sector, por lo tanto las adecuaciones técnicas a fin de mitigar el impacto auditivo causado por un compresor, un equipo de soldadura eléctrico, un equipo de soldadura autógena y lijadora serían tenidas en cuentas como un factor al momento de la tasación de la multa pero no como eximente de la responsabilidad. Sin embargo, no existe prueba alguna de que el propietario del establecimiento haya implementado medidas de mitigación y/o control de emisión de ruido proveniente de su actividad comercial.

Así mismo, dentro de las normas de rango constitucional, en el artículo 7° nació la obligación del Estado y de los particulares de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Igualmente, en el artículo 79 de la Constitución Política elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los Ciudadanos a gozar de un ambiente sano. El medio ambiente es un derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber de las personas, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Así mismo, dentro de la Ley 99 de 1993, se estableció en el artículo 107 que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Sea esta la oportunidad para aclararle al administrado que el procedimiento sancionatorio ambiental que nos convoca, se inició y continuó por el incumplimiento a los niveles de ruido establecidos en la Resolución 627 de 2009 y Decreto 948 de 1995.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C- 595 de 2010, al analizar la exequibilidad del parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, estableció:

RESOLUCIÓN No. 00959

“Los párrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de “culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333).”

No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales.

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su demostración.”

Que teniendo en cuenta el análisis anterior considera esta autoridad ambiental que en el presente caso, el cargo segundo formulado en contra del señor **GONZÁLEZ CAÑÓN**, consistente en haber generado ruido que traspasó los límites de una propiedad, en contravención de los estándares máximos permisibles o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, está llamado a prosperar.

Que así las cosas, en el expediente obran suficientes pruebas documentales y técnicas que dan cuenta de la responsabilidad del señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, con matrícula mercantil No. 00712003 del 21 de junio de 1996, respecto del incumplimiento de las normas en materia de ruido, en específico el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, pruebas que valga decir, habida cuenta que en ningún estado procesal fueron tachadas de falsas, luego al presumirse su legalidad, comportan documentos idóneos que acreditan el compromiso del investigado, en las infracciones cometidas.

Que con relación a la prueba documental, el tratadista Carlos Betancur Jaramillo en su obra Derecho Procesal Administrativo resalta lo siguiente:

(...)

RESOLUCIÓN No. 00959

“...Es de trascendental importancia dentro del proceso, por ser la forma documentada la que predomina en la esfera administrativa. En ésta se desenvuelve una actividad que genera, como dice Bielsa, una documentación propia, ya que ella es casi siempre formal, escrita o actuada. Esta documentación esta insita en toda la actividad administrativa. De allí que no se refiera sólo a los actos administrativos ni a los distintos pasos previos que deberán cumplirse para su expedición, sino también a todas las gestiones que cumple la administración en el ejercicio de su actividad. Así, tienen forma escrita, por regla general, los oficios, los conceptos, los requerimientos, las puestas en mora, las instrucciones de servicio, las circulares, los informes técnicos, etc...”

Que sumado a lo anterior, tal y como lo señala la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, la exposición a las emisiones atmosféricas y la actividad comercial de las empresas debe enmarcarse en los rangos que determine la ley, al punto que se proteja la salud y el medio ambiente. Veamos:

“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realiza su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.(subrayado fuera del texto)

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es

RESOLUCIÓN No. 00959

establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar.”. (Sentencia C-254 de 1.993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).”

Que en este orden de ideas, queda claro que el señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, con matrícula mercantil No. 00712003 del 21 de junio de 1996, infringió los derechos colectivos de los ciudadanos y la normativa ambiental vigente, de acuerdo con el incumplimiento del artículo 45 del Decreto 948 de 1995.

Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero “...dentro de los límites del bien común...”.

Que adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, T- 536 del 23 de septiembre de 1992, determinó:

“...Para esta Corte, entonces, no cabe duda que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia...”

Se considera pertinente en este momento hacer referencia a algunos criterios adicionales de la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

“La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.

“Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza

RESOLUCIÓN No. 00959

en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros)."

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero señala:

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo."

De acuerdo a esta interpretación que hace la Corte Constitucional, todas las personas son responsables del cuidado y conservación de los recursos naturales, tomando conciencia que no se debe agotar o menoscabar la base en que se sustentan, evitando el deterioro del medio ambiente, teniendo en cuenta que no solo es un derecho disfrutar del ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional, sino que también es un deber de todos protegerlo y propender por la calidad de vida y bienestar social de las futuras generaciones para la satisfacción de sus propias necesidades, principio por el cual se da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible, consagrado en la Ley 99 de 1993. Así mismo hace parte de este precepto, el cumplimiento de las obligaciones y deberes con relación a las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Que en conclusión, es obligación de esta Secretaría Distrital de Ambiente por mandato superior, en ejercicio de la gestión asignada, mediante el cumplimiento de las funciones fijadas legalmente y en el ámbito de su competencia hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales dentro del marco del estado de derecho y el desarrollo sostenible.

ANÁLISIS PROBATORIO

De acuerdo al cargo segundo formulado mediante Auto No. 01689 de 26 de marzo de 2014, se realiza el siguiente análisis:

Cargo Segundo: Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995.

Que de acuerdo a la visita técnica de inspección realizada el día 19 de junio de 2013, se emitió el Concepto Técnico No. 06026 de 27 de agosto de 2013, en el cual se concluyó que el generador de la emisión de ruido, incumple con los niveles máximos permisibles de emisión

Página 9 de 25

RESOLUCIÓN No. 00959

para un sector b. tranquilidad y ruido moderado, zona residencial en horario diurno, al registrar un valor de 70,31 dB(A), siendo el máximo permisible de 55 decibles.

De igual manera, las correcciones efectuadas al momento de la medición y los equipos utilizados para la misma (sonómetro y pistófono) calibrados de manera correcta, permitir inferir razonablemente que los valores arrojados son precisos.

Así pues, el cargo segundo se encuentra probado.

Si bien se formularon dos (2) cargos en el Auto No. 01689 de 26 de marzo de 2014, solamente está llamado a prosperar uno de ellos y de esta manera se tendrá en cuenta para los efectos de la tasación.

De esta manera, y una vez analizado el material probatorio, se considera que el señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, con matrícula mercantil No. 00712003 del 21 de junio de 1996, ubicado en la carrera 80 I No. 42- 42 sur de la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., infringió el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, razón por la cual esta Secretaría procederá a declarar responsable ambientalmente a la persona natural en mención, del cargo segundo a título de dolo formulado mediante el Auto No. 01454 de 5 agosto de 2013 y procederá a imponer una sanción, como a continuación se describe:

DE LA SANCIÓN A IMPONER

Que en consideración a los preceptos Constitucionales y Legales esta Secretaría ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del proceso sancionatorio iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal, habiéndose cumplido los procedimientos legales instaurados en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que protegen, en este caso, al propietario del establecimiento en comento, pero al no poder ésta desvirtuar los cargos formulados, la autoridad ambiental, en este caso, la Secretaría Distrital de Ambiente, está en la obligación de imponer la sanción respectiva.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa normativa, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales.

Que esta Entidad es competente para imponer las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 1993 según la gravedad de las infracciones debidamente comprobadas.

Que la precitada disposición, señala el tipo de sanciones a imponer al infractor de normas

Página 10 de 25

RESOLUCIÓN No. 00959

sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables. Igualmente, precisa en su párrafo primero, que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados, ni del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

“ARTICULO 40.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (...) impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(...)

Que el párrafo 2° del artículo 40 de la ley 1333 del 21 de Julio de 2009 determinó que el Gobierno Nacional definiría mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes donde se tendría en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.

Que con fundamento en lo dispuesto anteriormente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010 por medio del cual se fijaron los criterios para la imposición de sanciones ambientales, indicando en su artículo tercero que: “*Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.*”

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.”

Una vez agotado el trámite procesal dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y advertida la procedencia de sanción respecto del señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, con matrícula mercantil No. 00712003 del 21 de junio de 1996, ubicado en la carrera 80 I No. 42- 42 sur de la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., la Dirección de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente emitió el Concepto Técnico No. 01372 de 3 de abril

RESOLUCIÓN No. 00959

de 2017, que desarrolló los criterios para la imposición de la **sanción principal de MULTA**, acorde con los criterios establecidos en el artículo 4° del Decreto 3678 de 2010, el cual dispone:

“Artículo 4°.- Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5° de la [Ley 1333 de 2009](#), y con base en los siguientes criterios:

B: Beneficio ilícito

α: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor (...)”

En cumplimiento de la prenotada normativa, a través del Concepto Técnico mencionado anteriormente, se desarrollaron cualitativa y cuantitativamente los criterios expuestos, de conformidad con la metodología para la tasación de multas prevista en el artículo 4° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010 el cual prevén su artículo 4.- Multas.

En el cual para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación matemática:

$$\text{Multa} = B + [(i)*\alpha*(1+A)+Ca]*Cs$$

A continuación, se dará aplicación a la modelación matemática prevista en el artículo 4° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, de cara a los criterios para la imposición de la sanción principal de MULTA desarrollados para el presente caso respecto del señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en el Concepto Técnico No. 01372 de 3 de abril de 2017, así:

“(..)

3.1 Desarrollo de los criterios y variables para determinar el monto de la multa.

Metodología: Conforme a lo establecido en el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la [Ley 1333 del 21 de julio de 2009](#) y se toman otras determinaciones) y la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y el Manual Conceptual y Procedimental – Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción

Página 12 de 25

RESOLUCIÓN No. 00959

a la Normatividad Ambiental - MAVDT, se desarrolla a continuación el cálculo para cada una de las variables previstas en la modelación matemática definida en el artículo 4 de esta misma resolución y para el cargo segundo formulado mediante el Auto No. 01689 del 26 de marzo de 2014.

Modelo matemático

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * R) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

Dónde:

B: Beneficio ilícito

α : Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental

R: evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.

Beneficio Ilícito (B)

El valor del beneficio ilícito es la cuantía mínima que debe tomar una multa para cumplir su función disuasiva, y se refiere a la ganancia económica que obtiene el infractor fruto de su conducta:

$$B = \frac{Y * (1 - p)}{p}$$

$$Y = y_1 + y_2 + y_3$$

Donde:

Y: ingreso o percepción económica (costo evitado)

B: beneficio ilícito que debe cobrarse vía multa

p: capacidad de detección de la conducta

Ingresos directos de la actividad (Y₁): Este tipo de ingresos se mide con base en los ingresos reales del infractor por la realización del hecho.

Teniendo en cuenta que los hechos no generaron un ingreso directo al infractor, se considera esta variable en cero

y₁: 0

RESOLUCIÓN No. 00959

Costos evitados (Y_2): Esta variable cuantifica el ahorro económico por parte del agente al incumplir las normas ambientales y/o los actos administrativos. Es decir, la ganancia que se obtiene al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial.

Ya que, si bien cierto el infractor evito los costos de la insonorización del lugar, no es posible para esta Secretaría cuantificar con exactitud estos costos. Por lo anterior se considera esta variable en cero, y el provecho económico será considerado como agravante.

$y_2: 0$

Ahorros de retraso (Y_3): En los costos de retraso se ha de establecer que se cumplieron la norma ambiental y las actividades e inversiones que de ésta dependían, pero se realizaron con posterioridad a lo exigido legamente. Por tanto, el infractor realiza la inversión requerida pero su utilidad radica en el retraso.

Teniendo en cuenta las condiciones de la infracción, esta no genera ningún tipo de ahorros de retraso por lo cual esta variable es considerada en cero.

$y_3: 0$

4.1.2. Capacidad de Detección de la Conducta (P).

Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores:

Capacidad de detección baja: $p=0.40$

Capacidad de detección media: $p=0.45$

Capacidad de detección alta: $p=0.50$

Dado que para detectar la infracción fue necesario realizar visita técnica y mediciones, se considera una capacidad de detección baja

$p = 0.40$

Una vez definidos los valores del modelo, se obtiene que:

Como $p= 0.40$ y $Y= 0$, entonces B equivale a:

$B = 0$

RESOLUCIÓN No. 00959

4.1.3. *Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)*

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.

Del análisis de los criterios para establecer las circunstancias agravantes, aplicados a la conducta para los cargos 1 y 2, de acuerdo a los valores establecidos en la Resolución 2086 de 2010 se tiene que el señor Luis Eduardo González Cañón identificado con cedula de ciudadanía No. 19.848.845, cuenta con los siguientes agravantes:

Agravantes	Valor
Reincidencia.	0.2
Obtener provecho económico para sí o para un tercero	0.2
TOTAL, Agravantes	0,4

Se establece el agravante de reincidencia ya que en el expediente reposa concepto técnico No. 01267 del 11 de marzo del 2013 a través del cual se evidencio que el generador de la emisión, incumplía con los niveles de presión sonora.

A = 0,4

4.1.4. *Factor de Temporalidad (α)*

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo

Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365 días o más.

La variable alfa (α) se calcula aplicando la siguiente relación:

$$\alpha \pm = \frac{3}{364} * d + \left(1 - \frac{3}{364}\right)$$

RESOLUCIÓN No. 00959

Donde:

d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).

Donde:

a: factor de temporalidad

Teniendo en cuenta que la infracción fue detectada el día 19 de junio de 2013, fecha en la cual se realizó la medición de ruido emitido por el establecimiento, y debido a que para esta Secretaría no es posible establecer la fecha desde la cual el señor Luis Eduardo González Cañón identificado con cedula de ciudadanía No. 19.848.845, está incumpliendo la normatividad ambiental, esta infracción se considera como un hecho instantáneo.

Por lo anterior el número de días en los que se considera permaneció la infracción es 1

$\alpha = 1$

4.1.5. Costos Asociados (Ca)

La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor.

Para este caso y teniendo en cuenta que la Autoridad Ambiental no incurrió en costos adicionales a los de seguimiento y control propios de la Entidad, no se configuran costos asociados.

Ca = 0

4.1.6. Evaluación del riesgo (r)

Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación, así como a la magnitud del potencial afecto.

Es por esto que se debe evaluar en estos casos el riesgo que se deriva de tales incumplimientos, teniendo presente por lo menos los siguientes dos aspectos:

- *La probabilidad de ocurrencia de afectación (o)*
- *La magnitud potencial de la afectación (m)*

RESOLUCIÓN No. 00959

Magnitud potencial de afectación (m):

La magnitud potencial de afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de la valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Una vez obtenido el valor (I) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:

Criterio de valoración de afectación	Importancia de la afectación	Nivel potencial de impacto
Irrelevante	8	20
Leve	9-20	35
Moderado	21-40	50
Severo	41-60	65
Crítico	61-80	80

A continuación, se determina la importancia de la afectación (I) basados en la calificación de cada uno de los siguientes atributos:

- Intensidad (IN)
- Extensión (EX)
- Persistencia (PE)
- Reversibilidad (RV)
- Recuperabilidad (MC)

Para la evaluación de la importancia de la afectación se considera como bien de protección el medio sociocultural del sector y como acción impactante la afectación en la salud de los habitantes del sector.

A continuación, entramos a ponderar los atributos que definen la importancia de la afectación:

- **Intensidad (In)**

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.</p> <p>Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0 y 33%.</p> <p>Teniendo en cuenta que para las condiciones del establecimiento se establece un máximo permisible de niveles de emisión de ruido de 55 dB(A), en la medición realizada por esta secretaría se registraron niveles de ruido de 65.5 dB(A). de acuerdo a lo anterior se presentó una desviación de 28 % del estándar fijado por la norma. Se considera la ponderación en 1.</p>

RESOLUCIÓN No. 00959

- Extensión (Ex)

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.</p> <p>Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.</p> <p>Debido a que el área de la afectación por emisión de ruido por parte del propietario del establecimiento, no superaba una hectárea se considera esta ponderación en 1</p>

- Persistencia (Pe)

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción.</p> <p>Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses</p> <p>Teniendo en cuenta que la conducta fue considerada como instantánea, y que no es posible establecer cuál sería la persistencia de la posible afectación a la salud de los habitantes, se considera esta ponderación en 1</p>

- Reversibilidad (RV)

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente</p> <p>Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses</p> <p>Teniendo en cuenta que la conducta fue considerada como instantánea, y que no puede establecer con certeza cuál sería el tiempo necesario para que el bien retorne a las condiciones anteriores a la afectación, se considera la mínima ponderación en 1.</p>

- Recuperabilidad (Mc)

Ponderación	Afectación del bien de protección
-------------	-----------------------------------

RESOLUCIÓN No. 00959

1	<p>Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.</p> <p>Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año</p> <p>Teniendo en cuenta que la conducta fue considerada como instantánea, y que no es posible establecer con certeza cuál sería el tiempo necesario para que el bien afectado pueda recuperarse, se considera la mínima ponderación 1.</p>
---	---

Valoración de la Importancia de la afectación (I):

$$I = (3In) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc$$

$$I = (3*1) + (2*1) + 1 + 1 + 1$$

$$I = 8$$

De acuerdo a lo mencionado anteriormente a una importancia de afectación de 8, le corresponde una magnitud potencial de afectación de 20.

Probabilidad de Ocurrencia (o)

Determina la probabilidad de ocurrencia de la afectación, la probabilidad de ocurrencia para el presente caso es muy baja $o=0.2$, ya que no hay evidencia probatoria de las afectaciones en el sector por sobrepasar los niveles de ruido permitidos en la normatividad ambiental.

Valoración de la Probabilidad de Ocurrencia

Criterio	Valor de Probabilidad de Ocurrencia
Muy Alta	1
Alta	0.8
Moderada	0.6
Baja	0.4
Muy Baja	0.2

Determinación del Riesgo (r)

RESOLUCIÓN No. 00959

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas.

$$r = o * m$$

$$r = 4$$

Obtenido el valor del riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo a partir de la siguiente ecuación:

$$R = (11.03 * SMMLV) * r$$

Donde:

R: Valor monetario de la importancia del riesgo

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (en pesos)

r: Riesgo

$$R = (11.03 * 737.717) * 4$$

$r = 32.548.074,00$ Treinta y Dos Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Setenta y Cuatro Pesos/Mcte

4.1.7. Capacidad Socioeconómica del Infractor (Cs)

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010.

Realizada la consulta en el Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio, se encontró que el señor Luis Eduardo González Cañón identificado con cedula de ciudadanía No. 19.848.845, propietario del establecimiento INDUSTRIAS GONZALEZ, es persona natural. Por lo anterior se procede a calcular la capacidad socioeconómica de acuerdo a la base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas Sociales, conocido como SISBEN.

Una vez consultada la base de datos del SISBEN, se encuentran que el señor Luis Eduardo González Cañón, cuenta con un puntaje de 59.39, el cual equivale al nivel 4.

Equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad socioeconómica del infractor

NIVEL SISBEN	CAPACIDAD SOCIOECONOMICA
1	0,01
2	0,02

RESOLUCIÓN No. 00959

3	0,03
4	0,04
5	0,05
6	0,06
<i>Poblaciones desplazadas, indígenas y desmovilizadas por ser población especial no poseen puntaje, ni nivel.</i>	
	0,01

Fuente: <http://www.sisben.gov.co>

Equivalencias entre el puntaje y el nivel SISBEN

NIVEL SEGÚN ZONA URBANA	
PUNTAJE OBTENIDO	NIVEL CORRESPONDIENTE
01.00-11.00	1
11.01 – 22.00	2
22.01 – 43.00	3
43.01 – 65.00	4
65.01 – 79.00	5
79.01 – 100.00	6

FUENTE: <http://tramitescolombia.org/sisben/>

Teniendo en cuenta lo anterior se considera la capacidad socioeconómica del infractor en 0.04

Cs = 0.04

Definidas todas las variables y factores se proceden al cálculo de la multa:

Multa = B + [(α * i) * (1 + A) + Ca] * Cs

Multa Cargo segundo = 0 + [(1 * 32.548.074,00) * (1 + 0.4) + 0] * 0.04

Multa Cargo segundo = \$1.822.692 Un Millón Ochocientos veintidós Mil seiscientos Noventa y Dos Pesos M/CTE.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al grupo jurídico se analicen las observaciones de carácter técnico establecidas en el numeral 3.0, Para adoptar la decisión que corresponda dentro del proceso sancionatorio.

RESOLUCIÓN No. 00959

(...)"

Que como consecuencia de encontrar responsable ambientalmente al señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, respecto al cargo segundo imputado, esta Secretaría encuentra procedente imponer como sanción principal una multa por valor de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.822.692)**.

Que la sanción a imponer mediante la presente resolución no exonera al señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, de cumplir con las acciones y obligaciones ordenadas por esta entidad, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

Que el artículo 5° del Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el mismo artículo en el literal l) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Que de conformidad con lo contemplado en el numeral 2 del artículo primero de la Resolución 1037 del 28 de julio de 2016, el Secretario Distrital de Ambiente, delega en el Director de Control Ambiental, la función de expedir los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.

Que en mérito de lo expuesto,

RESOLUCIÓN No. 00959

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar responsable al señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, con matrícula mercantil No. 00712003 del 21 de junio de 1996, ubicado en la carrera 80 I No. 42- 42 sur de la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., del cargo segundo formulado mediante Auto No. 01689 de 26 de marzo del 2014, consistente en generar ruido que traspasó los límites de una propiedad en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Imponer al señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845, en calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado **INDUSTRIAS GONZÁLEZ**, con matrícula mercantil No. 00712003 del 21 de junio de 1996, la **SANCIÓN** de **MULTA** por valor **UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.822.692)**.

PARÁGRAFO PRIMERO: la multa anteriormente fijada, se deberá cancelar en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, a órdenes de la Secretaría Distrital de Ambiente (Fondo de Financiación del Plan de Gestión Ambiental), Concepto M – 05-550 otros, en la Tesorería Distrital, ventanilla número 2, ubicada en el Supercade de la carrera 30 con calle 26 y previo diligenciamiento del formato para el recaudo de conceptos varios, disponible en la sede de la entidad, ubicada en la carrera 14 No. 54 -38. Una vez efectuado el pago se deberá a llegar a esta Secretaría, copia del recibo expedido con destino al expediente SDA-08-2011-3008.

PARÁGRAFO SEGUNDO: si el citado obligado al pago de la multa, no diera cumplimiento a lo ordenado, dicha multa presta merito ejecutivo y por tanto, se hará efectiva por medio del procedimiento de jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ CAÑÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.845 o a su apoderado debidamente constituido, en la carrera 80 I No. 42-42 sur de la Localidad de Kennedy de Bogotá D.C.

ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar la presente Resolución a la Subdirección Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa de esta Secretaría para lo de su competencia.

RESOLUCIÓN No. 00959

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo señalado en el memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo ente de control enunciado y su instructivo.

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga esta Secretaría. Lo anterior en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Reportar la presente sanción una vez se encuentre ejecutoriada, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del RUIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o por intermedio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales conforme a lo dispuesto en los artículos los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 16 días del mes de mayo del 2017



OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

(Anexos):

Elaboró:

MANUEL ALEJANDRO BOTÍA
CARDOZO

C.C: 1136879529 T.P: N/A

CONTRATO 20170189 DE 2017 FECHA EJECUCION: 17/04/2017

Revisó:

JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLEEN C.C: 79724443 T.P: N/A

CONTRATO 20170292 DE 2017 FECHA EJECUCION: 19/04/2017

Aprobó:
Firmó:

Página 24 de 25



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 00959

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA

C.C:

11189486

T.P:

N/A

CPS: FUNCIONARIO

FECHA
EJECUCION:

16/05/2017